



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

03 de septiembre de 2020

Proceso Nro. 2020-0071

Auto sustanciación Nro.389

Visto el informe secretarial que antecede, el despacho considera:

En decisión AC140-2020 del 24 de enero de 2020, radicado 11001-02-03-000-2019-00320-00, la Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil fijó la siguiente regla jurisprudencial:

“en los procesos de servidumbre, en los que se está ejercitando un derecho real por parte de una persona jurídica de derecho público, la regla de competencia aplicable es la del numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso”

Entretanto, el numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso, es del siguiente tenor literal:

“En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad”

Quiere decir lo anterior que, en los procesos verbales de imposición de servidumbre de energía eléctrica es competente, de manera privativa, el juez del domicilio de la entidad pública.

En el expediente obra certificado de existencia y representación legal aportado por la convocante, en el que se observa que Transmisora Colombiana de Energía S.A.S ESP es una entidad privada cuya actividad es la transmisión nacional de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional de Colombia, es decir, la demandante presta un servicio público. Ahora bien, para determinar si es una entidad de las que trata el numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso, se tiene lo siguiente:

Mediante la Ley 142 de 1994 el Congreso estableció concretamente el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y señaló qué tipo especial de sujetos podrían prestarlos y bajo qué régimen jurídico debían hacerlo. A este respecto, el numeral 1° del artículo 15 de dicha Ley prescribe que pueden prestar esta clase de servicios, entre otras personas, las *“empresas de servicios públicos”*. La misma Ley en su artículo 14 establece dentro de las categorías de empresas de servicios públicos está la empresa de servicios públicos privada que, de acuerdo con esa normativa *“es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.”*

Más adelante, el artículo 17 de la Ley en cita define así la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos:

“Artículo 17. Naturaleza.

Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley”.

Ahora bien, el término *empresas de servicios públicos domiciliarios*, lo reserva la Ley 142 de 1994 para las sociedades por acciones –sean éstas públicas, mixtas o privadas que participen en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, **energía eléctrica**, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; o la realización de una o varias de las actividades complementarias. De tal manera que una comunidad organizada mediante una forma diferente no es considerada empresa de servicios públicos domiciliarios.

“El nombre de la empresa deberá estar seguido por las palabras “empresa de servicios públicos” o de las letras “ESP” y su duración podrá ser indefinida (Artículo 19.2., Ley 142 de 1994). En ellas pueden participar como socias otras empresas de servicios públicos, empresas que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, dependiendo de la oferta del bien o servicio en el mercado”.

La Ley 489 de 1998 establece integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

(...)

“2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

*d) Las empresas sociales del Estado **y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;***

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. (Subrayado nuestro)”

Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las “*demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público*”, categoría dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional. (Sentencia C – 736 de 007).

La Corte Constitucional en el estudio de constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 declaró su exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o

privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del poder público. (Sentencia C – 736 de 007).

Así mismo, en cuanto al artículo 68 de la misma ley, se recuerda en seguida su tenor:

“Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.” (Lo subrayado es lo demandado)

Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subrayado nuestro). Así las cosas, de manera implícita incluyen a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas. (Sentencia C – 736 de 007).

Con todo lo esbozado queda claro que Transmisora Colombiana de Energía S.A.S ESP es una entidad privada que presta un servicio público, de manera que debe considerarse como una entidad descentralizada por servicios de las

que trata el numeral 10 del artículo 28 del C.G.P. por ello, esta sede judicial carece de competencia en razón del factor subjetivo, correspondiendo el conocimiento de la acción instaurada a los Jueces Civiles municipales de Bogotá.

Así mismo, en consideración a que la competencia prevalente en este tipo de litigios es la que atiende a la calidad de las partes (artículo 29 C.G.P.), la competencia de este funcionario es improrrogable (artículo 16 C.G.P.).

Por las razones expuestas, se DISPONE:

- 1. DECLÁRESE la falta de competencia por el factor subjetivo.
- 2. ENVÍESE lo actuado de inmediato al juez competente.

NOTIFÍQUESE,


OSCAR ANDRÉS MENJURA CUERVO
JUEZ

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA

EL AUTO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE NOTIFICO EN ESTADO No. 014

HOY 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 A.M.


LUIS ALBERTO CARDOZO
SECRETARIO